

Calidad del gobierno, victimización delictiva y participación política particularista en América Latina

Quality of government, crime victimization and particularistic political participation in Latin America

Alejandra Armesto*

Perfiles Latinoamericanos, 27(53) | 2019

DOI: 10.18504/pl2753-004-2019

Recibido el 1 de enero de 2016

Aceptado el 23 de julio de 2018

Resumen

La literatura acerca de los efectos de la victimización sobre la participación política se ha concentrado en la participación cívica, partidista y electoral, pero ha ignorado las formas particularistas. En contextos de baja imparcialidad y alta corrupción de las instituciones del Estado, las víctimas tienen incentivos para recurrir al contacto directo con funcionarios públicos para acceder a la justicia y a servicios sociales. En este artículo se analizan datos de encuestas nacionales recogidos en 2012 en dieciocho países de América Latina por el Barómetro de las Américas, y se muestra una relación positiva entre victimización y participación política particularistas, la cual es moderada por la imparcialidad de las instituciones del Estado.

Abstract

Studies about the effects of victimization on political participation have focused on civic, partisan, and electoral participation, but have ignored particularistic forms of participation. In contexts of low impartiality and high corruption of State institutions, victims have incentives to resort to direct contact with public officials to access justice and social services. This article rests on the analysis of data from national surveys collected in 2012 in eighteen countries of Latin America by the Americas Barometer. The analyses show a positive relationship between victimization and particularistic political participation and that this relationship is moderated by the impartiality of the State institutions.

Palabras clave: victimización delictiva, calidad del gobierno, participación política particularista, México, América Latina, modelos jerárquicos lineales.

Keywords: crime victimization, quality of government, particularistic political participation, Mexico, Latin America, hierarchical linear models.

* Doctora en ciencia política por la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos). Profesora-investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México | alejandra.armesto@flacso.edu.mx

Introducción¹

¿Cuáles son los efectos de la victimización delictiva sobre la participación política particularista? La violencia criminal tiene efectos variados y hasta contradictorios sobre el capital social y la calidad democrática. Por una parte, la exposición a la violencia afecta negativamente la confianza interpersonal generalizada (Cassar, Grosjean & Whitt, 2013), la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas (Blanco, 2013; Corbacho, Philipp & Ruiz-Vega, 2015), y la satisfacción con el funcionamiento de la democracia (Carreras, 2013; Fernandez & Kuenzi, 2010). Por otra, la victimización y la exposición a la violencia también han sido asociadas a una mayor participación política.

Los estudios acerca de los efectos de la violencia criminal sobre la participación política se han concentrado en tres modos de participación de las víctimas: cívica, partidista y electoral, y dejan sin explorar la participación política particularista. El recurso por parte de los ciudadanos del contacto directo con políticos y burócratas para resolver sus problemas y acceder a beneficios de política pública es un modo de participación política especialmente relevante en contextos de baja calidad del gobierno, entendida esta como imparcialidad de las instituciones del Estado. Este trabajo analiza los efectos de la victimización por delito sobre la participación particularista y argumenta, en primer lugar, que en contextos de baja calidad del gobierno —baja imparcialidad y alta corrupción— la victimización delictiva será un incentivo para este modo de participación política; y en segundo, que la relación entre victimización por delito y participación política particularista es moderada por el nivel de imparcialidad del Estado.

El análisis se basa en datos de encuestas nacionales recogidos en dieciocho países de América Latina como parte del estudio Barómetro de las Américas. América Latina ofrece un buen caso para estudiar los efectos de la calidad del gobierno sobre la relación entre la victimización delictiva y la participación política por varias razones. Primero, porque se ha convertido en la región más violenta del mundo: desde la tercera ola de democratización, casi todos los países latinoamericanos han experimentado un incremento dramático en los niveles de violencia delictiva. De acuerdo con un estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia criminal: en 2012, aproximadamente el 30% de los homicidios de

¹ Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el Congreso Anual de la Law and Society Association en junio de 2016. Agradezco a los participantes de la mesa “Justice and Trust in Law”, así como a los dictaminadores anónimos de *Perfiles Latinoamericanos* las valiosas sugerencias. Cualquier error u omisión es mi exclusiva responsabilidad.

todo el mundo tuvo lugar en América Latina, aunque la población de esta, de 574 millones, sea solo el 8% del total mundial (UNODC, 2014). En segundo, porque en esta región hay altos niveles de violencia y corrupción, una amplia variación en las tasas de victimización, en la calidad del gobierno y en los modos de participación política. Los resultados de los análisis son consistentes con la hipótesis propuesta: la victimización delictiva tiene un efecto positivo sobre la participación política particularista y la intensidad de este efecto decrece conforme los niveles de imparcialidad del Estado se incrementan.

El artículo está organizado de la siguiente manera. Primero se propone un argumento para explicar por qué la calidad del gobierno afecta la proclividad de las víctimas de delitos a participar políticamente de manera particularista, en específico, a contactar directamente a los funcionarios públicos. En la segunda sección, se presentan los datos y luego la estrategia de análisis. El tercer apartado describe y discute los resultados de los análisis acerca de la relación entre victimización y participación particularista y del efecto moderador del nivel de imparcialidad sobre esa relación. Las conclusiones resumen los hallazgos y plantean preguntas para futuras investigaciones.

Participación política de las víctimas de delitos y violencia

Las víctimas de delitos buscan satisfacción a una serie de necesidades vinculadas al hecho de la victimización: apoyo emocional, acceso a servicios médicos y sociales, acceso a la justicia y buen gobierno, y diseño de estrategias para la prevención (Waller, 2010). El cumplimiento de estos derechos o la satisfacción de estas necesidades se dan, entre otros mecanismos, a través de la participación comunitaria, social y política de las víctimas.

La participación social y política es multidimensional. Booth & Seligson (2009) distinguen seis modos de participación: activismo comunitario, activismo cívico, participación en protestas y elecciones, activismo partidista, y contacto directo con funcionarios públicos. Los estudios acerca de la relación entre victimización y participación política se han concentrado en la participación comunitaria y cívica en organizaciones políticas partidistas o no gubernamentales, y en la participación electoral y en protestas. Los hallazgos de estas investigaciones muestran que las personas que han sido víctimas de delitos o han estado expuestas a la violencia participan en organizaciones comunitarias y políticas más que quienes no han sido víctimas. En Sierra Leona, las personas que fueron víctimas directas de la violencia durante la guerra civil se comprometen más con sus comunidades y participan en asociaciones comunitarias y políticas (Bellows & Miguel, 2009). En Burundi, las personas que estuvieron

expuestas al conflicto despliegan comportamientos y actitudes más altruistas hacia sus vecinos (Voors *et al.*, 2012). En Uganda, los jóvenes que fueron secuestrados y forzados a incorporarse a las milicias, una vez liberados, tienen niveles más altos de participación en actividades de organizaciones comunitarias y políticas (Blattman, 2009), y los residentes de distritos más afectados por la violencia durante la guerra participan más en reuniones políticas (De Luca & Verpooten, 2015). En Nepal, luego de una guerra civil de diez años, las comunidades más afectadas por la violencia muestran más comportamientos altruistas y de cooperación por medio de su contribución a la producción de bienes públicos (Gilligan, Pasquale & Samii, 2014). A su vez, las víctimas de delitos también se comprometen políticamente más que quienes no han sido victimizados, y este compromiso se expresa en una mayor participación en grupos comunitarios y políticos, y en protestas (Bateson, 2012). A diferencia de los efectos sobre la participación comunitaria y cívica, el impacto de la violencia sobre la participación en el ámbito electoral no es uniforme. En algunos casos, se ha encontrado que la violencia produce un incremento de la participación electoral (Bellows & Miguel, 2009; Blattman, 2009) y otros una reducción o ningún efecto, tanto en contextos de guerra civil (De Luca & Verpooten, 2015), cuanto de violencia criminal (Trelles & Carreras, 2012).

La participación en organizaciones comunitarias y políticas permite a las víctimas acceder al apoyo social que ayudaría a aliviar las consecuencias emocionales de la victimización (Bastian, Jetten & Ferris, 2014; Jennings & Andersen, 1996; Jennings, 1999). Y por medio de la participación en organizaciones políticas, partidistas y no gubernamentales, las víctimas buscan cambios institucionales y de políticas públicas ligados a las circunstancias o los crímenes que sufrieron (Bateson, 2012).

Calidad del gobierno y participación política particularista de las víctimas de delitos

Una forma de participación política ignorada por la investigación acerca de los efectos de la victimización es el contacto directo con políticos y funcionarios públicos. Este tipo de participación ha sido interpretada como comportamiento clientelista porque los ciudadanos participan contactando directamente con funcionarios y legisladores para peticionar y promover intereses particulares mediante el cabildeo (Booth & Seligson, 2009). La participación particularista tiene una relación curvilínea con forma de U invertida con la legitimidad, entendida como apoyo a las instituciones democráticas, lo que indica que quienes menos recurren a modos particularistas de participación son

los ciudadanos más críticos con el régimen y los que más apoyan las instituciones del gobierno. Mientras que los ciudadanos indiferentes con las instituciones democráticas son quienes más buscan el contacto directo con los funcionarios públicos (Booth & Seligson, 2009). Los estudios sobre tal tema han hallado que ello se encuentra asociado a la edad, el género (femenino), a la exposición a los medios, y al miedo al delito y a la victimización delictiva (Booth & Seligson, 2009).

Este trabajo argumenta que la inclinación de los ciudadanos que han sido víctimas a participar políticamente de modo particularista usando el contacto directo con funcionarios públicos varía entre los sistemas dependiendo de la calidad del gobierno. En sociedades con alta calidad del gobierno, donde las instituciones públicas proporcionan servicios con imparcialidad, los ciudadanos que han sido víctimas de un delito pueden satisfacer las necesidades de acceso a servicios de salud y sociales y de acceso a la justicia por medio de los canales institucionales. Mientras que donde las instituciones del Estado son parciales o corruptas los ciudadanos que han sido victimizados buscan resolver sus necesidades mediante formas particularistas de acceso (Buehler, 2016) debido a que tienen bajos niveles de confianza en las instituciones y de confianza interpersonal generalizada.

Rothstein & Teorell (2008) conceptualizan la calidad del gobierno como imparcialidad en el ejercicio del poder público, lo cual consiste en que, al implementar leyes y políticas, los funcionarios del gobierno no deben tener en cuenta nada sobre el ciudadano/caso que no se encuentre estipulado en la política o la ley. Para que las instituciones políticas sean imparciales tienen que descansar sobre la norma básica de universalismo, donde la integridad pública se entiende como el trato igualitario de los ciudadanos, independientemente del grupo al que pertenecen (Mungiu-Pippidi, 2006). La imparcialidad asimismo es un atributo de las medidas adoptadas por los jueces, los funcionarios públicos y demás miembros de la burocracia del Estado. Esta concepción de la calidad del gobierno como imparcialidad descarta toda práctica particularista como la corrupción, el clientelismo, el patronazgo y la discriminación (Rothstein & Teorell, 2008). La corrupción y las violaciones del Estado de derecho son acciones parciales porque benefician a ciertas personas, ya sea porque estas pagan un soborno o porque pertenecen a una red clientelar o partido político en particular. La imparcialidad como principio legitimador puede abarcar diversas prácticas administrativas. Por ejemplo, aplicada a las decisiones sobre el reclutamiento para el servicio público implica que la selección debe basarse en los méritos y calificaciones necesarios para el puesto; pero si se basa en contactos personales clientelistas, afinidades políticas, sobornos o identidad étnica, se viola el principio de imparcialidad. La corrupción, que puede ser

entendida como una forma de violar la imparcialidad, transgrede normas universales y las reemplaza con otras que promueven beneficios particularizados (Graeff & Svendsen, 2013).²

La calidad del gobierno tiene un efecto positivo sobre la confianza en las instituciones y la participación política por medio de mecanismos formales; y ha sido asociada positivamente con el apoyo que el ciudadano otorga a un gobierno (Anderson & Tverdova, 2003; Dahlberg & Holmberg, 2014; Dahlberg & Linde, 2016; Dahlberg, Linde & Holmberg, 2015), y con la estabilidad democrática (Rose & Shin, 2001). Los escándalos de corrupción y el uso de la burocracia y la obra pública con fines electorales han sido asociados a la pérdida de confianza en los políticos (Bowler & Karp, 2004), en los servidores públicos (Anderson & Tverdova, 2003), en las instituciones políticas (Chang & Chu, 2006; Inoguchi, 2002; Linde, 2012; Linde & Erlingsson, 2013; Morris & Klesner, 2010; Seligson, 2002), y a la inhibición de la participación electoral (Dahlberg & Solevid, 2016; Miles, 2015; Stockemer, LaMontagne & Scruggs, 2013; Sundström & Stockemer, 2015). Si los ciudadanos votan no para beneficio personal, sino por la satisfacción de cumplir con un deber cívico, la información acerca de políticos corruptos disminuye el valor de ese deber cívico y desincentiva la participación electoral (Chong *et al.*, 2015).

La calidad del gobierno, por otra parte, afecta la confianza interpersonal generalizada (Rothstein & Stolle, 2008; Rothstein, 2011). Algunos arreglos institucionales producen normas que refuerzan la confiabilidad. Por ejemplo, no tolerar la corrupción contribuye a que los ciudadanos sean más confiados (Putnam, 2000; You, 2012). Pero donde las instituciones no tratan a la ciudadanía de manera imparcial generan el efecto opuesto: ciudadanos que desconfían de los otros y son menos proclives a cooperar (Herreros & Criado, 2008; Rothstein & Stolle, 2003). Por ejemplo, si alguien comete un acto ilegal contra otro ciudadano, ignorando los términos formales de un contrato, en un contexto institucional de Estado de derecho y baja corrupción, el transgresor será castigado. Si las dos partes en tal contrato conocen las consecuencias de violar el contrato —y por consiguiente, las leyes que lo protegen— saben que romper las reglas no trae beneficios y, en consecuencia, ajustan su conducta. Con el tiempo, los agentes han aprendido que es mutuamente beneficioso respetar los contratos (Graeff & Svendsen, 2013). La corrupción impacta negativamente

² El concepto de calidad del gobierno como imparcialidad no está exento de críticas (Agnafors, 2013; Sparling, 2018). Sin embargo, la noción y la operacionalización de imparcialidad han sido implementados de manera fructífera en el estudio de las causas y los efectos de la calidad del gobierno (Bubbico *et al.*, 2017; Charron, 2016; Charron & Lapuente, 2013; Holmberg & Rothstein, 2012; Svallfords, 2013).

sobre la confianza interpersonal generalizada (Richey, 2010; Rothstein & Uslaner, 2005; Tao, Yang, Li & Lu, 2014) y refuerza la confianza particularista, esto es, la confianza entre los miembros de los grupos de pertenencia. Así, en contextos de alta corrupción del gobierno, los ciudadanos no confían en los extraños, sino solo en las redes estrechas de conocidos (Uslaner, 2008).

Por lo tanto, en contextos de baja calidad de las instituciones del Estado, baja imparcialidad, baja confianza en las instituciones y confianza interpersonal restringida a los grupos de pertenencia, las víctimas tienen incentivos para buscar la satisfacción a sus necesidades usando modos particularistas de participación. Las hipótesis para poner a prueba son las siguientes:

- H1: En países con baja calidad del gobierno, la victimización delictiva tiene un efecto positivo sobre la participación política particularista.
- H2: Con el aumento de la calidad del gobierno, el efecto positivo de la victimización delictiva sobre la participación particularista se debilita.

Para evaluar empíricamente estas hipótesis analizo los efectos de la victimización delictiva sobre la participación política particularista, y otros tres modos de participación no particularistas —electoral, partidista, y contenciosa— en México, un país con niveles bajos de imparcialidad en América Latina. Y además exploro el efecto moderador de la imparcialidad de las instituciones del Estado sobre la relación entre victimización y participación particularista en distintos países de América Latina.

Datos

Los datos para los análisis que siguen provienen de la encuesta del Barómetro de las Américas recolectada en dieciocho países de América Latina en 2012. Las encuestas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Latin American Public Opinion Project, LAPOP) tienen varias virtudes: son construidas muy cuidadosamente a fin de maximizar su representatividad y utilizan el mismo cuestionario en los diferentes países de la región. Una de las grandes ventajas de estas encuestas para comprender las tendencias de opinión pública en América Latina es su amplia comparabilidad. En los distintos países se hacen las mismas preguntas a los encuestados, lo que facilita un análisis para la región. La encuesta proporciona información acerca de la situación de victimización, participación política, y características sociodemográficas. Los datos se basan en las experiencias de victimización reportadas por los encuestados que son menos propensas al subregistro que las estadísticas oficiales de delincuencia.

La variable dependiente es la *participación política particularista*. Y para operacionalizarla sigo el procedimiento de Booth & Seligson (2009) y construyo un índice aditivo con las respuestas a las siguientes preguntas que buscan capturar el contacto directo de los ciudadanos con los políticos:

NP2. ¿Ha solicitado ayuda o ha presentado una petición a alguna oficina, funcionario, concejal o síndico del municipio/delegación durante los últimos doce meses?

Para poder resolver sus problemas, alguna vez ha pedido usted ayuda o cooperación:

CP2. ¿A algún diputado del Congreso?

CP4A. ¿A alguna autoridad local como el alcalde, regidores o municipalidad/corporación municipal?

CP4. ¿A algún ministerio/secretario, institución pública, u oficina del Estado?

Adicionalmente, para explorar el efecto de la victimización sobre los modos de participación política no particularistas, los análisis incluyen las formas de participación política *electoral*, *partidista* y *contenciosa*. En tanto que para medir la variable dependiente *participación electoral* solo se usan las respuestas a una pregunta sobre el comportamiento electoral en la elección presidencial previa: VB2. ¿Votó usted en las últimas elecciones presidenciales de 2006?

En cuanto a la medición de la participación política partidista construí un índice aditivo con las respuestas a las siguientes preguntas:

PP1. Durante las elecciones, alguna gente trata de convencer a otros para que voten por algún partido o candidato. ¿Con qué frecuencia ha tratado usted de convencer a otros para que voten por un partido o candidato?

PP2. Hay personas que trabajan para algún partido o candidato durante las campañas electorales. ¿Trabajó usted para algún candidato o partido en las pasadas elecciones presidenciales de 2006?

CP13. Ha asistido a ¿Reuniones de un partido o movimiento político?

La tercera forma de participación política no particularista, esto es, la participación política contenciosa, es medida con las respuestas a la siguiente pregunta de las encuestas del LAPOP:

PROT3. ¿En los últimos doce meses ha participado en una manifestación o protesta pública?

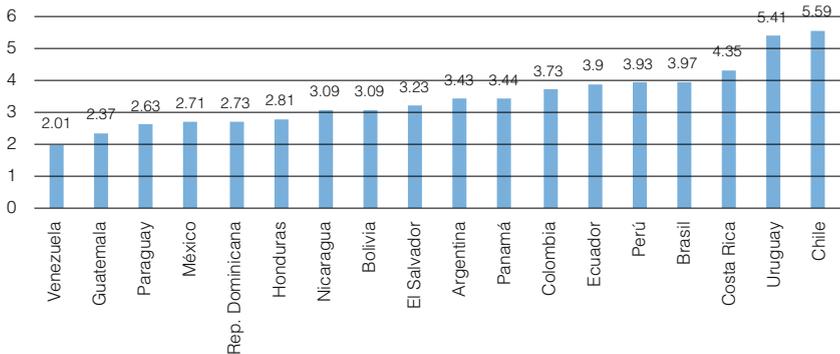
La variable independiente principal es *victimización*. Las víctimas son personas que, individual o colectivamente, han sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen las leyes penales vigentes, incluida la que proscribe el abuso de poder (UNDP, 2010). Para capturar la victimización por crimen, este estudio usa las respuestas a la siguiente pregunta:

VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos doce meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincencial en los últimos doce meses?

La variable independiente principal a nivel de país es *la imparcialidad de la administración pública*. Si la hipótesis del efecto condicional de la victimización por crimen sobre la participación particularista diera cuenta de la participación debemos esperar que los niveles más altos de imparcialidad del gobierno moderen esa relación. En las sociedades donde las instituciones públicas proporcionan servicios de modo imparcial, las víctimas de delitos deberían ser capaces de satisfacer sus necesidades —de apoyo con servicios sociales, de acceso a la justicia— utilizando los canales institucionales. Cuanto más imparciales sean las instituciones, menor deberá ser el efecto de la victimización sobre la participación particularista porque las víctimas accederán a los servicios sociales y de justicia sin necesidad de contactar a funcionarios o políticos. Pero si las instituciones del Estado son menos imparciales, la participación política particularista de las víctimas se intensificará. Para medir la imparcialidad de las instituciones del Estado recurro a la medida elaborada para la *Base de datos de la calidad del gobierno (Quality of Government Dataset)*. Esta evalúa qué tanto las instituciones del gobierno ejercen su poder con imparcialidad. La norma de imparcialidad se presenta y define “Cuando implementan leyes y políticas, los funcionarios del gobierno no toman en consideración ninguna otra cosa acerca de los ciudadanos/casos más que lo que está estipulado por la política pública o la ley” (Dahlberg *et al.*, 2016). La encuesta de expertos evalúa la posición de los países en cuanto al cumplimiento de la norma de imparcialidad. El índice se construye sumando cada medida ponderada por el factor obtenido con un análisis de componentes principales. Los valores perdidos son imputados a nivel de los expertos individuales y los valores para cada país se obtienen promediando las respuestas de los expertos. Las posibles respuestas van de 1 a 10, con los valores menores indicando niveles más bajos de imparcialidad y los mayores, niveles más altos de imparcialidad. El índice

de imparcialidad proporciona medidas para todos los países de América Latina. En 2011, el país más imparcial fue Chile con un puntaje de 5.59, y el menos imparcial Venezuela con 2.01.

Figura 1. Imparcialidad de las instituciones del Estado en América Latina, 2011.



Fuente: Elaboración propia con datos de *Quality of Government Dataset* (Dahlberg *et al.*, 2016).

Los modelos también incluyen variables para controlar por la presencia de pandillas, que se recoge a través de una pregunta de la encuesta que pregunta:

AOJ17. ¿Hasta qué punto diría que su barrio está afectado por las pandillas?

Por último, los análisis estadísticos consideran variables de control socio-demográficas relacionadas con las variables dependientes e independientes: sexo (varones = 1, mujer = 0), residentes urbanos (1 = urbano, 0 = no), edad, ingresos y años de educación.

Victimización y participación política en México

Para poner a prueba las hipótesis acerca de los efectos de la victimización y la imparcialidad de las instituciones del Estado sobre la participación política, primero estimo el efecto de la victimización sobre la participación política particularista utilizando el método cuasi experimental de pareamiento por puntaje de propensión (*propensity score matching*, PSM) con los datos de la encuesta del LAPOP en México para 2012. En segundo término, analizo el efecto de la variable contextual *imparcialidad de las instituciones del Es-*

tado sobre la relación entre victimización y participación particularista con modelos jerárquicos lineales para los datos de dieciocho países de América Latina en 2012.

Un reto en la estimación de los efectos causales en los estudios sociales es la causalidad inversa o endógena. En el caso de este artículo, ello puede expresarse en varias relaciones causales. Por un lado, como hipotetizamos, la victimización por crimen puede tener un efecto sobre la participación política particularista, pero la relación inversa también es posible: individuos con más lazos políticos podrían ofrecer más oportunidades para la victimización por delincuencia. Con el objetivo de sortear estas limitaciones, aquí se recurre al método de pareamiento por puntaje de propensión (PP) que permitirá reducir el potencial sesgo asociado con las variables observables. El método de pareamiento por PP da pauta para comparar pares de sujetos, sujetos víctimas y no-víctimas, que son similares en los factores que conducen a la victimización, de forma que después de diseñar los pares, los individuos son diferentes en su situación de victimización. En este caso, por medio del PSM, se identificó una serie de pares de personas similares en las características observables que predicen el ser víctima de la delincuencia, pero con la excepción de que uno de ellos habría sido efectivamente víctima de la delincuencia, y el otro no. Los modelos logísticos para el análisis de propensión incluyen controles para las variables que predicen el ser víctima del delito: residencia urbana, características personales y socioeconómicas de los individuos, y la percepción de la presencia de las pandillas. Una vez que se estimó el modelo, se obtuvo la probabilidad predicha de ser víctima, y el puntaje de propensión de cada individuo en la encuesta. Enseguida se calcula el efecto promedio del tratamiento en los tratados (ATT) sobre la participación política, dependiendo del puntaje de propensión, igualando cada víctima con una no-víctima de propensión similar. Para ello usamos los tres métodos convencionales en la literatura: vecino más cercano, kernel, y estratificado.

En cuanto al análisis de propensión para evaluar los efectos de la victimización sobre la participación política particularista he seleccionado el caso de México, un país con niveles bajos de calidad del gobierno medida esta como imparcialidad de las instituciones del Estado. México ofrece un caso adecuado para estudiar la relación entre victimización y participación en un contexto de baja imparcialidad de las instituciones del Estado. En primer lugar, desde 2007 México ha experimentado un incremento dramático de las tasas de delitos. La de homicidios intencionales creció de 11 por cada cien mil habitantes en 2006 a 18 en 2010 y alcanzó un pico de 24 en 2011. Los homicidios totales se incrementaron de los diez mil en 2006 a los veintisiete mil en 2011. Además crecieron los homicidios presuntamente vinculados al crimen orga-

nizado, otros delitos de alto impacto —secuestro y extorsión— y los delitos comunes. Entre 2006 y 2012, el crimen en general creció 13%, y los delitos de alto impacto, 21%. En segundo lugar, en México, la corrupción ha estado omnipresente durante el régimen hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tanto a nivel de alta política como en los intercambios entre servidores públicos y ciudadanos. La democracia no ha traído cambios en los niveles de corrupción y México permanece entre los países con los índices más bajos de transparencia (Morris & Klesner, 2010). En la medida de calidad del gobierno, México tiene un puntaje de 2.71 en el Índice de Imparcialidad, a poco menos de una desviación estándar de la media de 3.47 para la región de América Latina.

Para llevar a cabo un análisis de propensión, primero se debe estimar un modelo de regresión logística para predecir la probabilidad de que un individuo dado sea una víctima, que es la variable tratamiento de interés en este trabajo. La tabla 1 describe los resultados del modelo de regresión logística y muestra que ciertas variables se asociaron significativamente con la victimización por delincuencia. La presencia de bandas, la residencia urbana, la edad, ser de sexo masculino y el ingreso se asociaron de manera positiva y significativa a la victimización por delincuencia.

Tabla 1. Regresión logística: propensión de ser victimizado

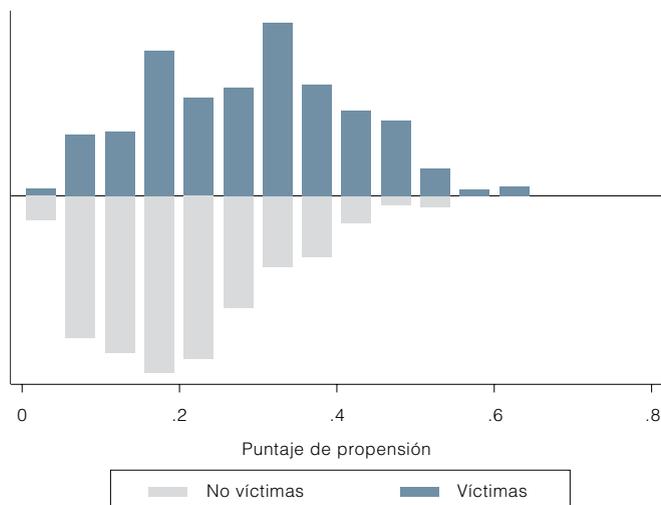
Presencia de pandillas	.0121*** (.0015)
Residencia urbana	.598*** (.1443)
Hombre	.2009** (.1006)
Edad	-.051 (.003)
Ingreso	.0402*** (.0145)
Educación	.0597*** (.0139)
Constante	-2.989*** (.244)
Observaciones	2415
Log likelihood	-1227.7026

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$.

Fuente: Elaboración propia.

Como muestra la figura 2, que describe el soporte común de los casos pareados, para cada individuo que fue víctima de algún delito se ha encontrado una observación similar en términos de sus covariables que no ha sido víctima.

Figura 2. Soporte común



Fuente: Cálculos propios con datos del LAPOP 2012.

Para calcular el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados (Average Treatment Effect, ATT), se aplicaron los métodos de vecino más próximo, kernel y estratificado. Los resultados (véase tabla 2) proporcionan evidencia acerca de la relación causal entre la victimización por delincuencia y la participación política particularista y la no relación entre la victimización y las otras formas de participación política. Los sujetos víctimas de delito son más propensos a la participación política particularista. Son resultados estadísticamente significativos con los tres métodos. Por el contrario, en tres formas restantes de participación política —electoral, partidista y contenciosa— no se registran diferencias significativas entre víctimas y no víctimas. Las primeras tienden a contactar directamente a los políticos para peticionar y para buscar soluciones a los problemas más que las segundas.

Tabla 2. Efecto promedio sobre los tratados (ATT). Victimización por crimen en México

Variable dependiente	Método	ATT
Participación política particularista	Vecino más cercano	9.408 *** (2.445)
	Kernel	10.720 *** (1.815)
	Estratificado	10.698 *** (2.014)

Tabla 2. Efecto promedio sobre los tratados (ATT). Victimización por crimen en México (Continuación)

<i>Variable dependiente</i>	<i>Método</i>	<i>ATT</i>
Participación política electoral	Vecino más cercano	-5.318 (5.531)
	Kernel	-2.503 (2.545)
	Estratificado	-2.530 (3.595)
Participación política partidista	Vecino más cercano	2.347 (2.475)
	Kernel	2.985 ** (1.488)
	Estratificado	2.765 (1.825)
Participación política contenciosa	Vecino más cercano	2.073 (2.407)
	Kernel	1.890 (1.662)
	Estratificado	1.582 (1.381)

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$.

Fuente: Elaboración propia.

Imparcialidad del gobierno y participación política de las víctimas del delito en América Latina

Como se argumentó arriba, el efecto individual de la victimización sobre los modos particularistas de participación política no debería ser uniforme en contextos diversos con respecto a los niveles de calidad del gobierno.

La variable independiente principal a nivel de país es *la imparcialidad de la administración pública*. Si la hipótesis del efecto condicional de la victimización por crimen sobre la participación particularista diera cuenta de la participación cabría esperar que los niveles más altos de imparcialidad del gobierno moderen la relación entre victimización y participación particularista. En las sociedades donde las instituciones públicas proporcionan servicios con imparcialidad, las víctimas de delitos deberían ser capaces de satisfacer sus necesidades —de apoyo con servicios sociales, de acceso a la justicia— vía los canales institucionales. Cuanto más imparciales sean las instituciones, menor deberá ser el efecto de la victimización sobre la participación particularista porque las víctimas accederán a los servicios sociales y de justicia sin necesidad de contactar a funcionarios o políticos. Mientras que si las instituciones del Estado son menos imparciales, el resultado debería ser contrario.

Los análisis que siguen se basan en información de 29 255 encuestados de los estudios del LAPOP de 2012 en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todas las encuestas son representativas a nivel nacional para los adultos en edad de votar (18 años y mayores). El tamaño de la muestra para cada ciclo es de alrededor de 1500 observaciones.

Los modelos controlan por factores de nivel individual que afectan la participación política y la victimización incluyendo una batería de indicadores socioeconómicos (edad, nivel educativo, género, ingresos autorreportados, residencia urbana) que, de acuerdo con los hallazgos de estudios previos, podrían determinar las probabilidades de ser víctima y la participación política. Añadido un indicador para controlar por la presencia de pandillas (Corbacho *et al.*, 2015). La tabla 3 presenta los estadísticos descriptivos de estas variables para la muestra completa de países latinoamericanos.

Tabla 3. Estadísticas descriptivas

		<i>Participación particularista</i>	<i>Víctimas</i>	<i>Pandillas</i>	<i>Hombre</i>	<i>Edad</i>	<i>Educación</i>	<i>Urbana</i>
Argentina	N	1500	1459	1487	1512	1498	1507	1512
	Media	10.11	0.357	36.087	0.498	41.893	10.472	1.119
	D. E.	20.69		33.070		17.110	3.757	
Bolivia	N	2972	2954	2969	3029	3029	3026	3029
	Media	8.25	0.411	40.762	0.497	37.442	9.829	1.370
	D. E.	19.23		33.199		15.288	4.895	
Brasil	N	1492	1453	1480	1499	1497	1495	1499
	Media	8.37	0.265	44.411	0.496	37.836	8.984	0.878
	D. E.	19.89		34.391		14.204	3.778	
Chile	N	1562	1535	1543	1571	1570	1562	1571
	Media	9.63	0.214	34.065	0.365	46.777	10.411	1.133
	D. E.	19.72		31.432		16.988	4.134	
Colombia	N	1506	1490	1485	1512	1449	1445	1512
	Media	9.54	0.338	37.753	0.50	36.903	9.582	0.785
	D. E.	20.08		37.365		14.698	4.341	
Costa Rica	N	1488	1477	1470	1498	1483	1485	1498
	Media	8.46	0.343	36.278	0.487	43.480	8.651	0.632
	D. E.	8.37		35.288		17.711	4.391	
República Dominicana	N	1509	1502	1488	1512	1511	1511	1512
	Media	9.52	0.311	48.877	0.499	39.451	9.448	0.646
	D. E.	21.31		37.502		16.333	4.664	
Ecuador	N	1435	1475	1463	1500	1494	1481	1500
	Media	8.95	0.482	39.938	0.499	39.001	10.489	0.655
	D. E.	18.29		34.171		14.607	4.267	
El Salvador	N	1489	1468	1464	1496	1458	1491	1497
	Media	12.87	0.288	37.816	0.501	40.299	7.477	0.645
	D. E.	22.11		35.851		17.443	4.902	

Tabla 3. Estadísticas descriptivas
(Continuación)

		Participación particularista	Víctimas	Pandillas	Hombre	Edad	Educación	Urbana
Guatemala	N	1489	1495	1501	1509	1506	1504	1509
	Media	12.77	0.334	35.995	0.509	38.728	6.911	0.463
	D. E.	22.24		33.953		14.813	4.711	
Honduras	N	1654	1651	1685	1728	1728	1706	1728
	Media	7.66	0.317	28.900	0.5	39.281	6.730	0.5
	D. E.	18.50		34.673		16.374	4.627	
México	N	1555	1552	1540	1560	1547	1554	1560
	Media	10.32	0.336	39.953	0.490	40.050	8.759	0.753
	D. E.	21.21		32.188		15.675	4.223	
Nicaragua	N	1682	1679	1680	1686	1686	1686	1686
	Media	11.11	0.250	30.236	0.5	39.052	6.824	0.594
	D. E.	21.18		34.180		16.261	4.567	
Panamá	N	1604	1580	1562	1620	1620	1599	1620
	Media	6.92	0.101	42.165	0.5	38.844	10.465	0.659
	D. E.	19.95		34.705		16.428	3.678	
Paraguay	N	1485	1434	1488	1510	1503	1504	1510
	Media	7.86	0.261	31.785	0.510	36.654	9.248	0.566
	D. E.	17.48		33.962		12.882	4.431	
Perú	N	1480	1450	1483	1500	1500	1499	1500
	Media	8.73	0.441	41.130	0.499	39.379	11.014	0.768
	D. E.	17.75		34.327		15.685	3.956	
Uruguay	N	1508	1496	1480	1512	1508	1507	1512
	Media	10.34	0.340	36.303	0.498	45.612	9.591	0.920
	D. E.	19.70		34.994		18.065	4.012	
Venezuela	N	1494	1471	1482	1500	1462	1483	1500
	Media	7.68	0.352	46.150	0.50	40.445	10.590	1.087
	D. E.	18.36		31.262		14.134	3.831	

Fuente: Elaboración propia.

Las observaciones individuales de las variables dependientes, los modos de participación, y de la experiencia de victimización se encuentran anidadas en contextos políticos con diferentes niveles de imparcialidad de las instituciones del Estado. En otras palabras, los individuos están anidados en contextos nacionales diferentes. Por este motivo, la estrategia de modelación más adecuada son los modelos jerárquicos lineales. Así, para la construcción de los modelos multi-nivel, se comprobó si, y en qué medida, la variable dependiente varía en los dos niveles de análisis: personas y países. Es decir, si la participación política varía entre los encuestados individuales y entre los dieciocho países latinoamericanos. Para ello, se descompuso la variación total en los cuatro modos de participación política entre la varianza a nivel individual y la del nivel de país mediante un

análisis de varianza (ANOVA) que revela diferencias significativas entre los países. Ello implica que, aunque hay mayor variación en los factores a nivel individual, también hay importantes fuentes de variación entre los países. Si se omitiera la naturaleza anidada multinivel de los datos, se podría crear una serie de problemas estadísticos tales como la subestimación de los errores estándar, entre otros (Raudenbush & Bryk, 2002; Snijders & Bosker, 1999).

Tabla 4. ANOVA en los modos de participación política a través de los niveles de análisis

Efectos fijos	Particularista	Electoral	Partidista	Contenciosa
Nivel individual	443.145	1716.12	614.18	736.42
Nivel país	9988.38	196999.17	47694.47	33702.71
N (Individuos)	35167	35218	34394	35437
N (Países)	18	18	18	18
F	22.54*	114.79*	77.66*	45.55*

* $p < 0.001$.

Fuente: Elaboración propia.

Para dar cuenta de la estructura anidada de los datos y de las fuentes de variación en los niveles de análisis, y modelar los efectos de interacción entre estos últimos, específico modelos multinivel de efectos fijos con dos niveles: individual y país. Los efectos individuales se estimaron con la siguiente ecuación:

$$Participación\ política_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j} Victimización_{ij} + \beta_{2j} Pandillas_{ij} + \beta_{3j} Residencia\ urbana_{ij} + \beta_{4j} Educación_{ij} + \beta_{5j} Edad_{ij} + \beta_{6j} Género_{ij} + \varepsilon \quad (1)$$

Esta ecuación modela la participación política (un modelo para cada modo de participación) como resultado de la media del país (β_{0j}) y las desviaciones individuales originadas en los efectos de las variables independientes y del error a nivel individual.

A su vez, la media del país es modelada como una función de variables macro del país para analizar el efecto de las diferencias en los niveles de *imparcialidad*:

$$\beta_{1j} = \gamma_{00} + \gamma_{01} Imparcialidad_j + u_{0j} \quad (2)$$

Esta ecuación pone a prueba la hipótesis de que el nivel promedio de participación política particularista será mayor a medida que declina la imparcialidad de las instituciones estatales.

Por último, la hipótesis principal es que el efecto positivo de la *victimización* por crimen sobre la *participación política particularista* se verá moderado

por la *imparcialidad de las instituciones*. Para evaluar este efecto, un segundo modelo incluye un término de interacción entre imparcialidad y victimización. La ecuación que sigue modela el efecto de la victimización en cada país j sobre la participación política particularista como función de los niveles de imparcialidad del Estado. Esta es una segunda ecuación a nivel país donde β_{1j} es la diferencia estimada entre víctimas y no-víctimas en el país j :

$$\beta_{1j} = \gamma_{10} + \gamma_{11} \text{Imparcialidad}_j + u_{1j} \quad (3)$$

Esta ecuación modela la hipótesis según la cual el efecto de la victimización sobre la participación política particularista es moderado por la imparcialidad de las instituciones del Estado.

En la estimación de los modelos, todas las variables de nivel individual —con excepción de la variable victimización— fueron centradas en la media del país.

Para poner a prueba la hipótesis propuesta, en este análisis se estiman dos modelos cuyos resultados se recogen en la tabla 5. En el primer modelo se evalúa el efecto directo de la victimización de los individuos y de la imparcialidad de las instituciones de los países sobre la participación particularista para el sujeto promedio de las encuestas. El segundo modelo incluye el término de interacción descrito en la tercera ecuación del apartado previo. Este modelo pone a prueba la hipótesis principal de este artículo según la cual la participación política particularista de las víctimas de la delincuencia es mayor en países con instituciones menos imparciales que en sistemas más imparciales.

A nivel individual, el hallazgo destacado es que, en promedio, la victimización por crimen induce una mayor participación política particularista. Este resultado en sí ya constituye una contribución a la literatura sobre los efectos de la victimización por crimen sobre la participación política, la cual había identificado efectos positivos de la victimización sobre la participación política electoral, y en grupos políticos y comunitarios (Bateson, 2012; Bellows & Miguel, 2009; Blattman, 2009), pero había ignorado la posibilidad de participación de las víctimas por medio de modos particularistas.

En los efectos a nivel individual de la victimización sobre la participación política particularista subyacen importantes diferencias entre los países latinoamericanos. En específico, como se hipotetizó, el efecto positivo de dicha victimización es moderado por la calidad del gobierno. El segundo modelo de la tabla 5 incorpora el término de interacción entre la imparcialidad de las instituciones del Estado y la victimización. Los resultados indican que el efecto de la victimización por delito sobre la participación particularista decrece cuando la imparcialidad de las instituciones se incrementa. Esto es, en países con niveles más bajos de imparcialidad de sus instituciones, los incentivos de las vícti-

mas para recurrir a los funcionarios públicos son mayores que en los países con instituciones más imparciales. Allí donde los ciudadanos pueden confiar en las instituciones y pueden recurrir a ellas esperando un tratamiento imparcial, la participación política particularista es menor. En cambio, en los países donde la imparcialidad es baja la victimización tiene un impacto mayor en el recurso de buscar el contacto directo con funcionarios. Las pruebas de comparación de desviaciones proporcionan evidencia adicional de que el término de interacción entre imparcialidad del gobierno y victimización contribuye de modo significativo a la explicación de la participación particularista.

Por último, cabe señalar que los coeficientes de la mayor parte de las variables de control a nivel individual son consistentes con los estudios acerca de la participación política y la victimización por crimen, tienen el signo esperado y son estadísticamente significativos. La participación política particularista crece con la presencia de pandillas, la edad y la educación y se reduce con la residencia urbana y el ingreso.

Tabla 5. Imparcialidad, victimización por delito y participación política particularista en América Latina

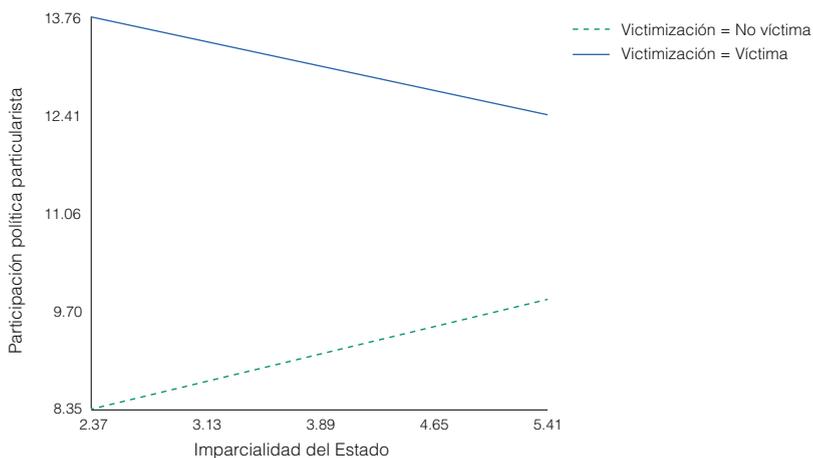
	<i>Modelo 1</i>	<i>Modelo 2</i>
Variables de nivel país		
Imparcialidad	0.316 (0.454)	0.496 (0.458)
Variables de nivel individual		
Victimización	4.395*** (0.334)	7.634*** (1.296)
Imparcialidad* Victimization		-0.936** (0.362)
Pandillas	0.006 (0.003)	0.006 (0.003)
Residencia urbana	-3.335*** (0.316)	-3.349*** (0.316)
Hombre	-0.001 (0.261)	-0.008 (0.261)
Edad	0.527*** (0.042)	0.530*** (0.042)
Edad (cuadrado)	-0.004*** (0.000)	-0.004*** (0.000)
Educación	0.206*** (0.035)	0.205*** (0.035)
Ingreso	-0.185*** (0.040)	-0.186*** (0.040)
Constante	10.121*** (1.643)	9.511*** (1.658)
Devianza	210857.817	210851.137***
N (Individuos)	29255	29255
N (Países)	18	18

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$. Pruebas de significancia estadística de dos colas. Errores estándar entre paréntesis.

Fuente: Elaboración propia.

¿Cuánto importa la imparcialidad de las instituciones del Estado para la participación política particularista de las víctimas del delito? Con el fin de ilustrar que el efecto de la victimización sobre la participación política varía según los niveles de imparcialidad de las instituciones, se ha graficado el nivel predicho de la participación particularista para víctimas y no víctimas de la delincuencia junto al resto de las variables en los modelos en su media. La figura 3 muestra que las víctimas reportan niveles más altos de participación particularista que quienes no han sido víctimas, que las víctimas participan de modo particularista a mayores tasas en países menos imparciales y que el efecto de la imparcialidad sobre la participación particularista para las no víctimas es positivo —el efecto opuesto al registrado entre las víctimas—. En países con niveles más bajos de imparcialidad la participación particularista de las víctimas es mayor que en países donde las instituciones del Estado son más imparciales. Los modelos predicen que, en los países con una administración pública menos imparcial, las víctimas participarán en modos particularistas más de cinco puntos (en una escala de cien puntos) por encima de quienes no han sido víctimas de delitos, mientras en el país más imparcial, la diferencia en los niveles de participación entre víctimas y no víctimas se reduce. En suma, los resultados apoyan fuertemente la hipótesis de que la victimización por crimen induce una mayor participación política particularista y que la magnitud de este efecto es moderada por la imparcialidad de las instituciones del Estado.

Figura 3. Efectos predichos de la imparcialidad sobre participación política particularista en víctimas y no víctimas de delito



Fuente: Elaboración propia.

Por último, exploro los efectos de la imparcialidad de las instituciones sobre la relación entre victimización y los modos de participación política no particularistas: electoral, partidista y contencioso. La investigación existente acerca de la relación entre victimización y participación política ha ofrecido evidencia del impacto de la exposición a la violencia y el delito sobre la participación comunitaria, cívica, partidista y, en algunos casos, hasta electoral. Este trabajo argumenta que en contextos de altos niveles de corrupción o baja imparcialidad de las instituciones del Estado, las víctimas recurren a modos particularistas de participación política para resolver sus necesidades de acceso a servicios sociales y a la justicia. Pero no esperamos que el contexto de corrupción o imparcialidad afecte de la misma manera la relación entre victimización y participación política no particularista. Para explorar el efecto de la imparcialidad sobre la asociación entre victimización y participación política no particularista, se han especificado tres modelos cuyas variables dependientes corresponden a cada uno de los modos de participación política no particularista: electoral, partidista y contenciosa. Y se ha incluido un término de interacción entre niveles entre el índice de imparcialidad de las instituciones de cada país y la experiencia de victimización de los sujetos.

Los modelos de la tabla 6 muestran que la victimización por crimen está asociada a una mayor participación política en los tres modos no particularistas, en consonancia con los estudios en otros países (Bateson, 2012; Bellows & Miguel, 2009; Blattman, 2009). Y que, a diferencia de la participación política particularista y como se esperaba, la relación entre victimización y estos tres modos de participación no particularista no se ve afectada de modo significativo por el nivel de imparcialidad de las instituciones. Los coeficientes de los términos de interacción entre niveles entre el índice de imparcialidad y victimización son negativos, pero no alcanzan niveles convencionales de significancia estadística. Es decir, que la participación política no particularista, electoral, partidista y contenciosa, es estimulada por la experiencia de victimización y es independiente del nivel de imparcialidad de las instituciones del gobierno.

Tabla 6. Imparcialidad, victimización por delito y participación política no-particularista en América Latina

	<i>Participación electoral</i>	<i>Participación partidista</i>	<i>Participación contenciosa</i>
Variables de nivel país			
Imparcialidad	3.695 (2.753)	-0.582 (0.976)	0.309 (0.921)
Variables de nivel individual			
Victimización	4.997* (2.473)	4.677*** (1.587)	4.985** (1.778)

Tabla 6. Imparcialidad, victimización por delito y participación política no-particularista en América Latina (Continuación)

	<i>Participación electoral</i>	<i>Participación partidista</i>	<i>Participación contenciosa</i>
Imparcialidad* Victimización	-1.227 (0.690)	-0.784 (0.443)	-0.071 (0.497)
Pandillas	-0.015* (0.007)	0.006 (0.004)	0.012* (0.005)
Residencia urbana	0.037 (0.602)	-2.207*** (0.397)	-0.366 (0.433)
Hombre	-0.623 (0.495)	3.739*** (0.318)	1.740*** (0.357)
Edad	3.763*** (0.081)	0.625*** (0.0521)	0.152** (0.058)
Edad (cuadrado)	0.033*** (0.000)	-0.005*** (0.000)	-0.001** (0.000)
Educación	0.877*** (0.067)	0.484*** (0.043)	0.499*** (0.048)
Ingreso	0.113 (0.076)	0.00 (0.048)	-0.009 (0.054)
Constante	63.645*** (2.753)	17.560*** (3.516)	5.278 (3.317)
Devianza	242170.278	216609.347	227641.934
N (Individuos)	23958	23529	24076
N (Países)	18	18	18

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$. Pruebas de significancia estadística de dos colas. Errores estándar entre paréntesis.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

La investigación acerca de las consecuencias de la exposición a la violencia —criminal y política— sobre el capital social muestra que la victimización estimula la participación política en diversas modalidades —comunitaria, cívica, partidista, entre otras— dejando sin explorar la participación particularista, el contacto directo de los ciudadanos con políticos o funcionarios públicos. Este artículo argumenta que en contextos de altos niveles de corrupción las formas particularistas de participación son especialmente relevantes, y propone que, en tales contextos, la victimización por delito estaría asociada a una mayor participación particularista, y que la relación entre la victimización y la participación particularista se verá moderada por el nivel de imparcialidad de las instituciones del Estado.

El artículo explora este argumento analizando el impacto directo de la victimización sobre la participación a través del contacto directo de los ciudadanos con políticos, y el efecto moderador de la imparcialidad de las instituciones políticas sobre esta relación entre victimización y participación particularista. El

análisis se basa en los datos de la encuesta 2012 del Barómetro de las Américas. Los resultados son consistentes con la hipótesis propuesta. En el análisis de la relación causal entre la victimización por delito y los modos de participación política en México —un país con altos niveles de corrupción y baja imparcialidad de las instituciones— mostraba efectos significativos en el caso de la participación particularista y la ausencia de relación causal en el de los modos de participación no particularista. Por otra parte, la intensidad de este efecto decrece a medida que los niveles de imparcialidad del Estado se incrementan; el efecto de la victimización sobre este modo de participación se reduce a medida que las instituciones son más imparciales.

La investigación acerca de los efectos de la victimización por delito y la participación política es todavía incipiente y sería deseable que futuras investigaciones atiendan algunas preguntas que se abren a partir de este estudio. En primer lugar, es necesario explorar qué tipo de necesidades buscan resolver las víctimas mediante el contacto directo con funcionarios del Estado. En segundo, sería recomendable ampliar y poner a prueba el argumento con un mayor número de países, incluyendo otras regiones que ofrezcan mayor variabilidad en la calidad del gobierno.

Referencias

- Agnafors, M. (2013). Quality of Government: Toward a More Complex Definition. *American Political Science Review*, 107(3), 433-445.
- Anderson, Ch. J. & Tverdova, Y. V. (2003). Corruption, Political Allegiances, and Attitudes Toward Government in Contemporary Democracies. *American Journal of Political Science*, 47(1), 91-109.
- Bastian, B., Jetten, J. & Ferris, L. J. (2014). Pain as Social Glue: Shared Pain Increases Cooperation. *Psychological Science*, 25(11), 2079-2085.
- Bateson, R. (2012). Crime victimization and political participation. *American Political Science Review*, 106(3), 570-587.
- Bellows, J. & Miguel, E. (2009). War and Local Collective Action in Sierra Leone. *Journal of Public Economics*, 93(11-12), 1144-1157.
- Buehler, M. (2016). Do You Have “Connections” at the Courthouse? An Original Survey on Informal Influence and Judicial Rulings in Morocco. *Political Research Quarterly*, 69(4), 760-772.

- Blanco, L. R. (2013). The impact of crime on trust in institutions in Mexico. *European Journal of Political Economy*, 32, 38-55.
- Blattman, Ch. (2009). From Violence to Voting: War and Political Participation in Uganda. *American Political Science Review*, 103(2), 231-247.
- Booth, J. A. & Seligson, M. A. (2009). *The Legitimacy Puzzle in Latin America. Political Support and Democracy in Eight Nations*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Bowler, S. & Karp, J. A. (2004). Politicians, scandals, and trust in government. *Political Behavior*, 26(3), 271-287.
- Bubbico, A., Elkind, J. & Martin, O. (2017). Quality of government and regional competition: A spatial analysis of subnational regions in the European Union. *European Journal of Political Research*, 56, 887-911.
- Carreras, M. (2013). The Impact of Criminal Violence on Regime legitimacy in Latin America. *Latin American Research Review*, 48(3), 85-107.
- Cassar, A., Grosjean, P. & Whitt, S. (2013). Legacies of violence: trust and market development. *Journal of Economic Growth*, 18(3), 285-318.
- Corbacho, A., Philipp, J. & Ruiz-Vega, M. (2015). Crime and Erosion of Trust: Evidence for Latin America. *World Development*, 70, 440-415.
- Chang, E. C. C. & Chu, Y.-H. (2006). Corruption and trust: Exceptionalism in Asian democracies? *Journal of Politics*, 68(2), 259-271.
- Charron, N. (2016). Explaining the allocation of regional Structural Funds: The conditional effect of governance and self-rule. *European Union Politics*, 17(4), 638-659.
- Charron, N. & Lapuente, V. (2013). Why Do Some Regions in Europe Have a Higher Quality of Government? *The Journal of Politics*, 75(3), 567-582.
- Chong, A., De la O, A. L., Karlan, D. & Wantchekon, L. (2015). Does Corruption Information Inspire the Fight or Quash the Hope? A Field Experiment in Mexico on Voter Turnout, Choice, and Party Identification, *Journal of Politics*, 77(1), 55-71.
- Dahlberg, S., Holmberg, S., Rothstein, B., Khomenko, A. & Svensson, R. (2016). *The Quality of Government Basic Dataset, version Jan16*.
- Dahlberg, S. & Holmberg, S. (2014). Democracy and bureaucracy: How their quality matters for popular satisfaction, *West European Politics*, 37(3), 515-537.

- Dahlberg, S. & Linde, J. (2016). Losing happily? The mitigating effect of democracy and the quality of government on the winner-loser gap in political support. *International Journal of Public Administration*, 39(9), 652-664.
- Dahlberg, S., Linde, J. & Holmberg, S. (2015). Democratic discontent in old and new democracies: assessing the importance of democratic input and governmental output. *Political Studies*, 63(1), 18-37.
- Dahlberg, S. & Solevid, M. (2016). Does corruption suppress voter turnout? *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 26(4), 489-510.
- De Luca, G. & Verpooten, M. (2015). Civil War and Political Participation: Evidence from Uganda. *Economic Development and Cultural Change*, 64(1), 113-141.
- Fernandez, K. E. & Kuenzi, M. (2010). Crime and Support for Democracy in Africa and Latin America. *Political Studies*, 58(3), 450-471.
- Gilligan, M. J., Pasquale, B. J. & Samii, C. (2014). Civil War and Social Cohesion: Lab-in-the-Field Evidence from Nepal. *American Journal of Political Science*, 58(3), 604-619.
- Graeff, P. y Svendsen, G. T. (2013). Trust and corruption: The influence of positive and negative social capital on the economic development in the European Union. *Quality & Quantity*, 47(5), 2829-2846.
- Herreros, F. & Criado, H. (2008). The State and the Development of Social Trust. *International Political Science Review*, 29(1), 53-71.
- Holmberg, S. & Rothstein, B. (2012). *Good Government. The Relevance of Political Science*, Northampton: Edward Elgar.
- Inoguchi, T. (2002). Broadening the basis of social capital in Japan. En R. Putnam (Ed.), *Democracies in flux: The evolution of social capital in contemporary society* (pp. 359-392). Oxford: Oxford University Press.
- Jennings, M. K. (1999). Political Responses to Pain and Loss: Presidential Address, American Political Science Association, 1998. *American Political Science Review*, 93(1), 1-13.
- Jennings, M. K. & Andersen, E. A. (1996). Support for Confrontational Tactics among AIDS Activists: A Study of Intra-movement Divisions. *American Journal of Political Science*, 40(2), 311-334.
- Linde, J. (2012). Why feed the hand that bites you? Perceptions of procedural fairness and system support in post-communist democracies. *European Journal of Political Research*, 51(3), 410-434.

- Linde, J. & Erlingsson, G. (2013). The Eroding Effect of Corruption on System Support in Sweden. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 26(4), 585-603.
- Miles, M. R. (2015). Turnout as Consent: How Fair Governance Encourages Voter Participation. *Political Research Quarterly*, 68(2), 363-376.
- Morris, S. D. & Klesner, J. L. (2010). Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence from Mexico. *Comparative Political Studies*, 43(10), 1258-1285.
- Mungiu-Pippidi, A. (2006). Corruption: Diagnosis and Treatment. *Journal of Democracy*, 17(3), 86-99.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone. The collapse and revival of American community*. Nueva York: Simon & Schuster.
- Raudenbush, S. W. & Bryk, A. S. (2002). *Hierarchical Linear Models*. Newbury Park, California: Sage.
- Richey, S. (2010). The Impact of Corruption on Social Trust. *American Politics Research*, 38(4), 676-690.
- Rose, R. & Shin, D. (2001). Democratization Backwards: The Problem of Third-Wave Democracies. *British Journal of Political Science*, 31(2), 331-354.
- Rothstein, B. (2011). *The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rothstein, B. & Stolle, D. (2008). The State and Social Capital: An Institutional Theory of Generalized Trust. *Comparative Politics*, 40(4), 441-459.
- Rothstein, B. & Teorell, J. (2008). What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 21(2), 165-190.
- Rothstein, B. & Uslaner, E. M. (2005). All for All: Equality, Corruption, and Social Trust. *World Politics*, 58(1), 41-72.
- Rothstein, B. & Stolle, D. (2003). Social capital, impartiality and the welfare state: An institutional approach. En M. Hooghe & D. Stolle (Eds.), *Generating social capital* (pp. 191-209). Nueva York: Palgrave.

- Seligson, M. (2002). The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries. *Journal of Politics*, 64(2), 408-433.
- Sparling, R. A. (2018). Impartiality and the Definition of Corruption. *Political Studies*, 66(2), 376-391.
- Snijders, T. A. B. & Bosker, R. J. (1999). *Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling*. Londres: Sage.
- Stockemer, D., LaMontagne, B. & Scruggs, L. (2013). Bribes and ballots: The impact of corruption on voter turnout in democracies. *International Political Science Review*, 34(1), 74-90.
- Sundström, A. & Stockemer, D. (2015). Regional variation in voter turnout in Europe: The impact of corruption perceptions. *Electoral Studies*, 40, 158-169.
- Svallfords, S. (2013). Government quality, egalitarianism, and attitudes to taxes and social spending: a European comparison. *European Political Science Review*, 5(3), 363-380.
- Tao, R., Yang, D. L., Li, M. & Lu, X. (2014). How does political trust affect social trust? An analysis of survey data from rural China using an instrumental variables approach. *International Political Science Review*, 35(2), 237-253.
- Trelles, A. & Carreras, M. (2012). Bullets and Votes: Violence and Electoral Participation in Mexico. *Journal of Politics in Latin America*, 4(2), 89-123.
- UNDP. (2010). *Manual on Victimization Surveys*. Ginebra: UNDP.
- UNODC. (2014). *Global Study on Homicide. Trends, Context, Data*. Viena: UNODC.
- Uslaner, E. M. (2008). *Corruption, Inequality, and the Rule of Law. The Bulging Pocket Makes the Easy Life*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Voors, M. J., Nillesen, E. E. M., Verwimp, P., Bulte, E. H., Lensink, R. & Soest, D. P. van. (2012). Violent Conflict and Behavior: A Field Experiment in Burundi. *American Economic Review*, 102(2), 941-964.
- Waller, I. (2010). *Rights for Victims of Crime: Rebalancing Justice*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
- You, J. (2012). Social Trust: Fairness Matters More Than Homogeneity. *Political Psychology*, 33(5), 701-721.